



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 28 107 120

Auto Interlocutorio No. 180

MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76109-33-33-003-2016-00054-01
DEMANDANTE:	LEONOR HELENA CUERO PALACIOS
DEMANDADO:	DISTRITO DE BUENAVENTURA
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – CONFIRMA

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso apelación propuesto por la parte ejecutante, contra el auto interlocutorio nro. 1007 del 26 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Buenaventura, que denegó el mandamiento de pago por haber operado la caducidad de la acción.

II. ANTECEDENTES

La señora Leonor Helena Cuero Palacios a través de apoderado judicial, presentó demanda ejecutiva<sup>1</sup>, para que se libre mandamiento de pago en contra del Distrito de Buenaventura, conforme al fallo del 11 de diciembre de 1998 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle, dentro del proceso de reparación directa con radicado nro. 22847.

II. PROVIDENCIA APELADA

El Juzgado Tercero Administrativo de Buenaventura, mediante auto interlocutorio nro. 1007 del 26 de septiembre de 2019<sup>2</sup>, denegó el mandamiento de pago solicitado por la señora Leonor Helena Cuero Palacios por haberse configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.

Para ello considero que:

*"i) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sección Primera, profirió la sentencia condenatoria en contra del Municipio de Buenaventura y las Empresas Publicas del mismo Municipio, para que pagaran la suma equivalente a 1.000 gramos oro en favor de la ejecutante el 11 de diciembre de 1998, quedando debidamente ejecutoriada el 3 de junio de 1999, según constancia que reposa dentro del expediente.*

*ii) A partir del 3 de junio de 1999 comenzaron a correr los 18 meses consagrados en el artículo 177 del C.C.A. (Decreto 01 de 1984), los cuales se configuraron el 3 de diciembre de 2000 fecha a partir de la cual la sentencia es exigible.*

*iii) El 19 de abril de 2002 se suscribió el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, momento desde el cual se suspende la caducidad por el término de 8 años y medio como quedo consagrado dentro de la cláusula 25 de la primera*

<sup>1</sup> Ver folios 70 - 72

<sup>2</sup> Ver folios 142 - 144



*modificación de dicho Acuerdo, los cuales se vencieron el 19 de octubre de 2010.*

*iv) Desde el 3 de diciembre de 2000 (fecha de exigibilidad de la sentencia) hasta el 19 de abril de 2002 (fecha en que entró en vigencia el acuerdo) transcurrieron 1 año, 4 meses y 15 días del término de caducidad para la presentación de la demanda al momento de la suspensión del mismo, quedando pendiente para que opere la caducidad 3 años, 8 meses y 15 días, los cuales se reanudaron y comenzaron a correr nuevamente a partir del 20 de octubre de 2010, día siguiente de la terminación de la vigencia del precitado acuerdo.*

*v) La presentación de la demanda bajo el medio de control ejecutivo se efectuó el 10 de agosto de 2015 ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, como se observa en el acta de reparto que reposa dentro del sub examine, fecha para la cual ya habían transcurrido 4 años, 9 meses y 20 días desde el momento en que fue reanudado el término en virtud del artículo 14 de la Ley 550 de 1999, sobrepasando entonces los 3 años, 8 meses y 15 días que le quedaban a la parte actora antes de la suspensión del mismo."*

Indicó que al momento de instaurarse la demanda ya había operado el fenómeno de la caducidad.

### **III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:**

El apoderado judicial de la parte demandante, dentro del término oportuno presentó recurso de apelación visible a folio 148, argumentando que la sentencia quedo condicionada al pago de la entidad junto con la suspensión del pago de las obligaciones por el acuerdo de reestructuración, más el término para la solicitud de la ejecución, además, indicó que el término de la caducidad corre a partir de la fecha del saldo no cancelado por la entidad demandada, cuando se reconoce el pago parcial de a obligación reconocida.

### **IV. CONSIDERACIONES:**

De conformidad con el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, el Tribunal Administrativo del Valle es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de los autos susceptibles de este medio de impugnación.

#### **4.1. PROBLEMA JURÍDICO**

El asunto que se discute se contrae a establecer si frente a la acción ejecutiva interpuesta por la señora Leonor Helena Cuero Palacios operó el fenómeno de la caducidad o si por el contrario la misma se interpuso dentro del término.

#### **4.2. CADUCIDAD EN EL PROCESO EJECUTIVO**

La caducidad es el fenómeno jurídico que extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un derecho en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un medio de control u otro mecanismo previsto en la ley.



El Consejo de Estado en sentencia del 2 de marzo de 2017<sup>3</sup>, estableció que:

*“(...) La caducidad genera la extinción del derecho de acción por el transcurrir del tiempo; de manera tal que la demanda debe ser presentada dentro del término de ley, en aras a salvaguardar el interés general y la seguridad jurídica. Sin embargo, dicho lapso concluye ante la inactividad de quien encontrándose legitimado en la causa, no acciona en tiempo; por lo que la caducidad se presenta como un límite al ejercicio del derecho de acción del ciudadano. (...)”*

Este fenómeno es concebido para desarrollar el principio de seguridad jurídica bajo los criterios de racionalidad y suficiencia temporal.

EL CPACA en su artículo 164 - numeral 2º - literal k, establece que cuando se pretende la ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el término para solicitar su ejecución será de 5 años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ella contenida so pena de que opere la caducidad.

Por su parte la Ley 550 de 1999, estableció un régimen encaminado a promover y facilitar la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones, por lo que en el numeral 13 del artículo 58, se dispuso que ***“durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho.”*** (Negrillas y cursivas del Tribunal)

#### 4.3. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 320<sup>4</sup> del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306<sup>5</sup> del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

Para resolver, se tienen que, la caducidad es uno de los llamados presupuestos procesales del medio de control, esto es, uno de aquellos requisitos que se deben acreditar, ab initio, para que se pueda instaurar la demanda. Dichas exigencias, por regla general, deben ser verificadas en la primera etapa del proceso, es decir, en el momento del estudio para la admisión en la medida en que se debe propender por un control temprano del proceso.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda –Subsección B. C.P. César Palomino Cortés. Sentencia del 2 de marzo de 2017. Radicado: 13001-23-33-000-2013-00224-01.

<sup>4</sup> Artículo 320. Fines de la apelación.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

(...).

<sup>5</sup> ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.



Del acervo probatorio obrante en el expediente se extrae lo siguiente:

- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a través de la sentencia del 11 de diciembre de 1998<sup>6</sup>, dentro del proceso de reparación directa con radico nro. 22847, declaró responsables solidariamente al municipio de Buenaventura y a las Empresas Publicas del mismo municipio, por los perjuicios sufridos por la señora Leonor Helena Cuero Palacios y los condenó a pagar el equivalente a 1.000 gramos oro puro.
- La sentencia se notificó mediante edicto nro. 115 del 16 de marzo de 1999<sup>7</sup>.
- La sentencia quedó debidamente ejecutoriada el 3 de junio de 1999<sup>8</sup>.
- El municipio de Buenaventura suscribió Acuerdo de Reestructuración de pasivos con sus acreedores, con fecha 19 de abril de 2002<sup>9</sup>.
- Con fecha 16 de julio de 2004<sup>10</sup>, se realizó la primera modificación al Acuerdo de Reestructuración de pasivos, en el cual se estableció entre otras: "**CLAUSULA 25. LA CLAUSULA 64 DEL ACUERDO DE RESTRUCTURACION QUEDARA ASI: DURACION DEL ACUERDO: De conformidad con el Escenario Financiero el presente acuerdo tiene una duración de 8 años y medio, sin perjuicio de que este término sea inferior en el evento en que se prepaguen la totalidad de las obligaciones.**"
- La suspensión de la caducidad por el Acuerdo de Reestructuración por el término de 8 años y medio, corrió desde el 19 de abril de 2002 hasta el 19 de octubre de 2010.
- La demanda ejecutiva se radicó el 10 de agosto de 2015<sup>11</sup>.

En cuanto al momento a partir del cual se predica la exigibilidad de las sentencias dictadas en contra de la Administración, para el caso que nos ocupa la misma se hizo exigible 18 meses después, de su ejecutoria, de conformidad con lo previsto en el inciso 4º del artículo 177 del Decreto 01 de 1984<sup>12</sup>, pues la sentencia del 11 de diciembre de 1998 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quedó ejecutoriada el 3 de junio de 1999, esto es en vigencia del CCA.

Se reitera, que los términos de caducidad de las obligaciones a cargo del Municipio de Buenaventura no corrieron entre el 19 de abril de 2002 hasta el 19 de octubre de 2010, esto es, por el espacio de ocho años y medio. De manera una vez terminado la duración del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, el 19 de octubre de 2010, se reanudó el cómputo de los cinco (5) años con que contaba la actora para formular la demanda ejecutiva respecto de las obligaciones reconocidas en la sentencia condenatoria.

Con fundamento en lo anterior, se tiene que la sentencia del 11 de diciembre de 1998, que sirve como base del recaudo ejecutivo, quedó ejecutoriada el 3 de junio de 1999; dicha sentencia se hizo exigible 18 meses después de la ejecutoria, esto es el 3 de diciembre de 2000; por lo tanto, el término de 5 años para interponer la demanda ejecutiva, corrió a partir del 3 de diciembre de 2000 al 18 de abril de 2002 (trascurrieron 1 año, 4 meses y 15 días); pues, entre el 19 de abril del 2002 al 19 de octubre de 2010 (8 años y 6 meses) se suspendieron los términos de caducidad por el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos que suscribió el municipio de Buenaventura; los términos se reanudaron a partir del 20 de octubre de 2010 hasta el 5 de junio de 2014 (3 años, 7 meses y 15 días).

<sup>6</sup> Ver folios 2 - 11

<sup>7</sup> Ver folio 12

<sup>8</sup> Ver folio 14 vuelto, 15 y 16

<sup>9</sup> Ver folios 29 - 50

<sup>10</sup> Ver folios 23 - 28

<sup>11</sup> Ver folios 72 y 76

<sup>12</sup> Artículo 177 del CCA.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la fecha límite para formular la demanda ejecutiva era el **5 de junio de 2014**, y como la demanda ejecutiva fue radicada el **10 de agosto de 2015**, al momento de interponer la demanda había operado el fenómeno de la caducidad, puesto que ya habían transcurrido 1 año y 2 meses del término límite.

Así las cosas, la demanda ejecutiva radicada el 10 de agosto de 2015 por la parte ejecutante, se presentó por fuera del término señalado en el artículo 164, literal K) del CPACA, de manera que es posible afirmar que operó la caducidad.

Así las cosas, la Sala de Decisión considera que tal como lo sostuvo el *a-quo* se configuró el fenómeno de la caducidad de la acción ejecutiva promovida por la señora Leonor Helena Cuero Palacios contra la entidad ejecutada, razón suficiente para confirmar el auto apelado.

Por lo anterior, se confirmará el auto interlocutorio nro. 1007 del 26 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Buenaventura. En consecuencia, se;

### RESUELVE

**PRIMERO. - CONFIRMAR** el auto interlocutorio nro. 1007 del 26 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Buenaventura, por las razones expuesta en este proveído.

**SEGUNDO:** En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen, para lo de su cargo.<sup>13</sup>

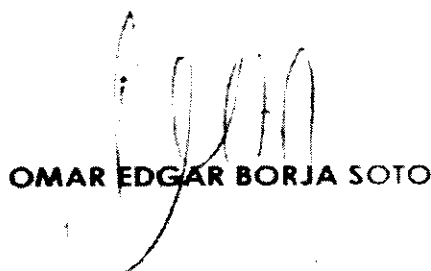
Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. (Acta No. \_\_\_\_).

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,**

Los Magistrados.

  
ÓSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

  
EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

  
OMAR EDGAR BORJA SOTO

30 JUL 2020 am 11:43 TAV-1

<sup>13</sup> AAGG  
VoBo Secretario